



Reunión virtual

Consultas a puerta cerrada con organizaciones de la sociedad civil

“Abogar por la rendición de cuentas en el Territorio Palestino Ocupado”

Organizada por el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino

8 de noviembre de 2022

RESUMEN DEL PRESIDENTE

El 8 de noviembre de 2022, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino celebró consultas a puerta cerrada con organizaciones de la sociedad civil sobre el tema “Abogar por la rendición de cuentas en el Territorio Palestino Ocupado”, en una reunión virtual que siguió la regla de Chatham House. Entre los participantes se encontraban representantes de organizaciones de la sociedad civil de Palestina, Israel y los Estados Unidos, así como de miembros y observadores del Comité.

El objetivo de la reunión era promover el intercambio de opiniones entre los miembros del Comité y los representantes de la sociedad civil con respecto a la cuestión de la obligación de rendir cuentas, que ha pasado a ser fundamental para abordar la cuestión del fin de la ocupación israelí y la defensa del derecho internacional.

La reunión fue presidida por el **Excmo. Sr. Embajador Cheikh Niang**, Representante Permanente del Senegal y Presidente del Comité. En sus observaciones introductorias, el **Presidente** dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia crucial de la lucha contra la impunidad, recordando que Israel tomaba cada vez más medidas para silenciar a varias organizaciones de derechos humanos o para reducir drásticamente su ámbito de actuación.

En sus presentaciones y durante el debate, las organizaciones participantes plantearon las siguientes cuestiones: 1) la forma de poner fin a la represión y el apartheid de Israel contra los palestinos; 2) el seguimiento de las actuaciones de la Corte Penal Internacional y de las recientes conclusiones de la Comisión de Investigación y otras instancias; 3) la promoción de la responsabilidad individual y estatal por las violaciones de los derechos de los palestinos; 4) la investigación del papel del sector privado en la economía de la ocupación israelí.

Los oradores se refirieron a la escalada de abusos de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y a las acciones de las fuerzas militares israelíes en el marco de lo que muchas organizaciones denominaron “un sistema de opresión que equivale al apartheid”. Los participantes destacaron que las relaciones de la comunidad internacional con Israel debían basarse en el consenso con respecto a la ilegalidad de la ocupación, durante cinco décadas, del Territorio Palestino Ocupado. Para proteger la solución

biestatal y el orden jurídico internacional, las Naciones Unidas y sus Estados Miembros debían seguir aplicando los principios de manera uniforme y coherente. Los oradores insistieron en que, para abordar esta situación, primero había que reconocer que existía un apartheid, y añadieron que las normas establecidas y el compromiso adquirido para proteger a la población civil ucraniana, por ejemplo, debían aplicarse a nivel mundial, incluso en el caso de los palestinos.

Los panelistas destacaron además cómo se estaba deteriorando la situación en Gaza, donde la población vivía un proceso de desdesarrollo en el que la vida cotidiana estaba marcada por las restricciones a la circulación y se violaban innumerables derechos humanos. Vivir en las condiciones extremas de Gaza significaba que incluso ir a un hospital resultaba una tarea imposible. Se dijo que la intención del Gobierno de Israel era impedir que se hiciera realidad la solución biestatal basada en las fronteras de 1967. Lo único que podían hacer las organizaciones no gubernamentales era asegurarse de que los perpetradores rindieran cuentas por sus crímenes y, al mismo tiempo, promover la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas.

Se mencionó que durante los tres años anteriores, los palestinos habían experimentado un aumento de la violencia perpetrada por las fuerzas militares israelíes y, cada vez más, por los colonos. Los activistas por los derechos humanos israelíes señalaron que apenas podían lograr avances en el marco del poder judicial israelí y que seguían siendo infructuosas las peticiones para que las fuerzas israelíes rindieran cuentas por sus graves violaciones.

Los participantes afirmaron que solo la intervención de la comunidad internacional podría poner fin a la violencia y a los abusos contra los derechos humanos; la Corte Penal Internacional seguía siendo un mecanismo de último recurso, para las víctimas que no tenían otros medios para obtener justicia. También recalcaron las obligaciones que incumbían a Israel como Potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario, y destacaron el riesgo inminente de desplazamiento forzoso de los palestinos, incluidas las comunidades beduinas presentes en Massafer Yatta, en el sur de la Ribera Occidental, así como en Jan al-Ahmar.

Un orador destacó el papel del sector privado en lo que respecta a la complicidad con la apropiación de los recursos palestinos por parte de Israel. Las empresas que participaban en la “economía de la ocupación israelí” eran parte integrante de la economía de los colonos y se beneficiaban de los incentivos proporcionados por las autoridades israelíes. Dado que la economía de los colonos estaba interrelacionada con la economía israelí, la responsabilidad de las empresas era, por tanto, un componente esencial para replantearse la forma de entender el contexto y lograr una paz justa y duradera.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, una de las organizaciones de la sociedad civil participantes formuló varias recomendaciones al Comité, entre ellas que prosiguiera su labor de denuncia de los abusos cometidos en el Territorio Palestino Ocupado. Los participantes subrayaron que la labor del Comité podía inspirarse en la lucha contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. También se mencionó la posibilidad de solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, como primer paso. Mientras tanto, los Estados Miembros podrían adoptar otras medidas. Además, la comunidad internacional debía prestar más atención a la responsabilidad empresarial, ya que solo una respuesta general de los Estados Miembros podría tener un impacto. Entre otras medidas, la publicación de listas de empresas podría constituir una herramienta contra futuros abusos israelíes. Por ello, los oradores pidieron que se actualizara la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos de todas las empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

Los miembros del Comité destacaron la importancia crucial de la colaboración permanente con las organizaciones de la sociedad civil y mencionaron cómo sus aportaciones y recomendaciones añadían valor al trabajo del Comité.

El **Embajador Cheikh Niang** dio por clausurada la reunión.

* * *